

# **Colisión entre Cortes: los conflictos de competencia entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de la Nación.**

**Por: Luis Eduardo Medina Torres, UAM Iztapalapa.**

## **I. Introducción**

El objetivo de la ponencia es analizar la situación compleja que se ha presentado recientemente entre las competencias que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) frente a las correspondientes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Desde la reforma electoral de 1996 se determinó que la competencia general del ámbito electoral sería del TEPJF que se instituyó en aquel año y que la SCJN solamente revisaría las acciones de inconstitucionalidad que se presentaran con motivo de cambios a las leyes electorales; la determinación anterior se mantuvo con las reformas electorales de 2008 y 2014.

Sin embargo, en 2022 en específico por las demandas sobre propaganda gubernamental, la SCJN ha comenzado a resolver sobre cuestiones electorales que, en principio, son competencia exclusiva del TEPJF. De hecho, en un asunto que involucra directamente a funcionarios ligados a la presidencia de la república, la SCJN admitió a trámite la Controversia Constitucional 21/2022, a fin de impedir que la Fiscalía General de la República (FGR) entregue la investigación que ha realizado respecto a funcionarios implicados en propaganda gubernamental a la Unidad Técnica de Fiscalización (UTC) del Instituto Nacional Electoral (INE) como había ordenado previamente la sentencia SUP-JE-03/2022 de Sala Superior del TEPJF.

Así, en la ponencia revisamos, primero, el concepto de conflicto entre cortes para explicar por qué nos referimos a una colisión de competencias. Luego estudiamos las competencias que las normas constitucionales estipulan para el SCJN y el TEPJF en cuestiones electorales. Posteriormente, analizamos la sentencia SUP-JE-03/2022 del TEPJF y en una ulterior sección analizamos la sentencia de la CC 21/2022 que se espera sea fallada por el pleno de la SCJN a más tardar en el otoño de este año. La última sección son las conclusiones de la ponencia.

## **II. Exploración conceptual: Colisión entre cortes o choque entre cortes**

Discusión doctrinaria.

La distinción entre reglas y principios ha ocupado buena parte de la literatura del derecho constitucional, pese a ser ambas normas jurídicas, léase enunciados prescriptivos que brinda orden, en tanto permiten o prohíben conductas, pero con significativas diferencias. Sobre todo, al hacer referencia a su aplicación y la forma de resolver situaciones de contradicción entre reglas y principios.

Zagrebelsky señala "...por lo general, las normas legislativas son reglas, mientras que las normas constitucionales sobre derechos y sobre la justicia son predominantemente, principios..." (Zagrebelsky, 1995: 109), no debe olvidarse que la Constitución también contiene reglas, aún cuando pueden existir principios jurídicos fuera de esta.

No obstante, Atienza y Ruíz Manero, al igual que Ronald Dworkin, sostienen que la relación entre derecho, moral y argumentación jurídica es una relación tensa y compleja (Atienza y Ruíz Manero, 1991: 101-107).

Dworkin construye su argumento criticando de manera frontal el positivismo jurídico al distinguir entre reglas y principios, señalando a aquellos autores que consideran el derecho como un sistema normativo, el cual se integra exclusivamente por reglas, las cuales se identifican por la forma como se adoptan y desarrollan.

Dworkin ataja tal lógica y señala, cuando los juristas razonan, no son solamente las reglas las guían su proceso lógico, sino otro tipo de silogismos, como lo son los principios, elemento que el positivismo jurídico suele ignorar, pese a su presencia. Por lo tanto, se critica dos pilares del positivismo jurídico, la distinción "derecho y moral" y la tesis de discreción judicial.

Para Dworkin un principio es una norma que debe ser observada no por su origen, sino porque es una exigencia de la justicia, por ejemplo, la equidad, la igualdad, la libertad, el interés público, o alguna otra dimensión del constructo de la moralidad de una sociedad (Dworkin, 1995: 75-78). De hecho, la existencia de estos principios son canales capilares mediante los cuales se integra dicha moral al derecho.

Posturas contrarias señalan que los valores, los principios y los derechos no son derecho si no se incorporan al sistema jurídico por los procedimientos establecidos, el derecho legal y el judicial.

Es evidente que la discusión estriba en la racionalidad y fundamentos de las herramientas interpretativas de un sistema jurídico, a través de las cuales se ponderan principios y que van más allá de interpretaciones a la letra o sustantivas de reglas aplicadas a casos en concreto.

En ese sentido, la distinción estructural entre reglas y principios puede verse dividida, a grandes rasgos en dos tesis principales. Por un lado, “la tesis de débil separación”, según la diferencia entre reglas y principios es una diferencia de grado, por lo que desempeñan un papel análogo en el discurso jurídico, los partidarios de esta tesis brindan mayor relevancia a los principios pues lo les confieren una mayor generalidad. Mientras que “la tesis fuerte de la separación” la diferencia entre reglas y principio no se agota en su generalidad, ya que cualitativamente hay diferencias en su estructura y categoría (Aarnio, 2000: 539).

Lo cierto es que la discusión sobre si prima la norma o los principios aún está inacabada, sin embargo, esto obliga a la ponderación, acto racional y argumentado del juez. “En definitiva, es posible afirmar que lo que parecen hacer los principios constitucionales es justamente cercenar la discrecionalidad del legislador, pues en el esquema del constitucionalismo contemporáneo el sistema queda saturado mediante los principios, con la particularidad de que estos principios, que antes han limitado la libertad política del legislador, se muestran después como dúctiles instrumentos en manos del juez” (Ruiz, 2013: 354).

Así, la consideración de principios o la rematerialización de la constitución a través de los principios supone desplazar la discrecionalidad legislativa, hacía el poder judicial, sin embargo, este segundo está obligado a la argumentación racional de su interpretación. Esto impone al juez la obligación de poner un particular empeño en la justificación y motivación de su orientación decisional. Es decir, cuando expone las razones que ha considerado para tomar tal o cual decisión y no otra. Adicional al test de aceptabilidad al que debe ser sometida la decisión judicial. Sin duda un

candado de la actividad jurisdiccional que el constitucionalismo contemporáneo ha establecido.

### Las colisiones de derechos fundamentales

La colisión de principios es uno de los eventos jurisdiccionales más complicados de solucionar en derechos humanos desde la perspectiva del constitucionalismo. La ponderación se ha presentado como un mecanismo de solución que trabaja a partir de reglas y una ley ponderativa. Así, el juez debe basar su decisión de priorizar un derecho sobre el otro, siempre explicando su razonamiento. Pese a esto, no existe una disposición positiva que regule la ponderación, por ello se suele recurrir a la doctrina jurídica para justificar la adopción de tal o cual criterio para ponderar.

Cuando los derechos fundamentales entran en colisión generan que estos no puedan ser ejercidos en un mismo momento. Y esto es así porque las sociedades y coaliciones de pensamiento en un cuerpo social evolucionan día con día. En la actualidad derechos fundamentales que tenía probabilidades bajas de colisionar con otros, están constantemente en tensión con otros derechos.

La ponderación busca la mejor solución para la protección de los derechos de los demás, pero el cuestionamiento de ¿cuál de los derechos fundamentales tienen prioridad? Es complicado de resolver y obliga a las y los jueces a generarse preguntas que le permitan priorizar principios o derechos en tensión. Esta decisión siempre es complicada y de suyo polémica porque significa establecer una prioridad, aunque sea de forma implícita con lo que necesariamente se carga la determinación en favor de uno de los principios en tensión.

En términos generales una norma, de acuerdo con Hans Kelsen en *Teoría pura del derecho*, tiene una estructura hipotética, es decir, si X entonces Z, por lo que si X es el supuesto de la norma, Z sería la consecuencia que desprende. Por lo que la o el juez deben juzgar con Z aquella conducta, denominada X (Kelsen, 1983: 71-72).

Sin embargo, los derechos fundamentales son principios que se encuentran en un ordenamiento jurídico los cuales no siguen la estructura lógica mencionada anteriormente, ya que su característica consiste en orientar su cumplimiento con

brevedad y eficacia. Establecida la distinción entre normas y principios, se comprende que la tensión entre principios no es una cuestión de validez, sino de establecer la importancia y peso específico que tiene uno, frente a otro, lo que lleva al problema de la legitimidad. Así, resolver las tensiones entre principios, no implica invalidar uno de estos, sino explorar propuestas de solución para dar la correcta finalización a la tensión, explicando el razonamiento de porqué prevalece un derecho, sobre otro.

La ponderación no busca dar una única e inmutable solución a una problemática. Intenta ofrecer resultados racionales a partir de la valoración, para que al aplicarse se logre una protección a los derechos fundamentales de aquel que se encuentre mayormente vulnerable y requiera la priorización de su tutelaje. No siempre se aplicará igual, pero la ponderación amplía las posibilidades de resolución de estas tensiones.

#### Colisiones entre cortes

Con base en lo anteriormente expuesto se habla de colisiones entre cortes, no solamente desde la perspectiva técnica de confusión de competencias y atribuciones, sino del traslape de estas a partir de la interpretación de estas cortes sobre sus competencias para tutelar principios en tensión, aun cuando materialmente la tensión entre principios competa a una corte específica.

Para los fines del presente trabajo se hace referencia al expediente SUP-JE-03/2022 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el cual el Instituto Nacional Electoral (INE) solicita al TEPJF su intervención con la finalidad de llamar a la Fiscalía General de la República (FGR) a colaborar con la Unidad Técnica de Fiscalización del INE y entregar la información solicitada para que la autoridad administrativa en materia electoral pueda llevar a buen puerto su responsabilidad fiscalizadora y cumplir con el principio de interés público que ampara el ejercicio de recursos por parte de los partidos políticos, en tanto entes públicos. En dicho expediente se da cuenta del argumento presentado por la FGR para negar la información solicitada, pretextando el artículo 218 de Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), relativo al secreto ministerial. Este artículo

impone a las autoridades, especialmente las que tienen que ver con la procuración de justicia, el deber de cuidado respecto a las diligencias y la información que se puede volver pública, ya que es una obligación de la autoridad resguardar el contenido de sus actuaciones y la reserva debida para garantizar la presunción de inocencia y el debido proceso legal.

El problema es que si bien existe el secreto ministerial la misma constitución impone a la autoridad administrativa electoral una obligación para investigar hasta las últimas consecuencias los efectos posibles de los procedimientos sancionadores, lo que implica extender su campo de acción, lo que significa que materialmente el hecho corresponde a la materia electoral. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se declaró competente para conocer del tema, pese a las funciones y atribuciones establecidas en la constitución, las cuales establecen con presión aquellos casos de la materia electoral en los cuales la SCJN debe involucrarse, presentándose una colisión entre cortes.

### **III. Las competencias de las cortes TEPJF y SCJN en materia electoral de acuerdo con la constitución**

La reforma electoral de 1996 instituyó al TEPJF como la última instancia en cuestiones electorales y órgano especializado del poder judicial de la federación (Constitución, art. 99), esto implicó que desde esa fecha el TEPJF se hace cargo de resolver las demandas relativas a las elecciones federales y también de los comicios locales. Hasta el día de hoy tal determinación no ha sido modificada o enmendada por el constituyente permante.

En la misma reforma de 1996 se estableció que la SCJN se haría cargo de las Acciones de Inconstitucionalidad (AI) en materia electoral a fin de controvertir las nuevas leyes electorales que aprobaran los congresos, ya fuera el federal o bien los de los estados (Constitución, art. 105, frac. II), siendo la única instancia para conocer y resolver dichas impugnaciones.

La misma reforma de 1996 precisó cuáles eran los órganos competentes para plantear las AI y determinó que solamente se harían declaratorias de inconstitucionalidad con una votación calificada de ocho de los once votos del pleno de la SCJN (Constitución, art. 105, frac. II), la cual es el requerimiento más alto de una votación calificada porque significa el contar con el 72% de los votos para que se logre una declaratoria de inconstitucionalidad. Esto se encuentra vigente y no ha variado en las diversas reformas.

Posteriormente al TEPJF se le dio la posibilidad de decretar la inaplicación de artículos legales ante casos concretos de impugnaciones por control constitucional (reforma de 2008) y recientemente en la reforma de 2014 se le asignó resolver los procedimientos sancionadores (Constitución, art. 41, frac. III, apartado D) que se inician en el INE y se terminan fallando en las salas del TEPJF. Es conveniente recordar que justo los asuntos sancionadores han sido polémicos por la participación de medios de comunicación, por la propaganda gubernamental y por la intervención de funcionarios públicos en las elecciones, todo lo cual se regula a partir del modelo de comunicación política que se instituyó en 2008 a demanda del partido perdedor en la elección presidencial de 2006.

De la breve relación anterior debe quedar claro que desde la reforma fundacional a fines del siglo XX quedó establecido que la SCJN tendría una participación reducida en cuestiones electorales aunque muy importante al ser el órgano de control constitucional sobre la legislación electoral, lo que se realiza mediante las AI.

Por su parte, desde la reforma de 1996 quedó claro que el TEPJF era el órgano de jurisdicción de los procesos electorales fueran locales o federales, lo que lo convertía en la última palabra para resolver las controversias comiciales. En términos de gobernanza electoral es la última etapa o fase con la que se cierra el ciclo electoral.

Lo anterior había sido cumplido y suficientemente claro para los actores y para los órganos hasta que recientemente algunos de los actores, especialmente vinculados al partido en el gobierno comenzaron a demandar que la SCJN revirtiera decisiones del TEPJF con el argumento que la Corte es la cabeza del poder judicial y al ser el

Tribunal Electoral un órgano de este poder, la SCJN podría revisar las decisiones de aquél, aunque la Constitución diga una cuestión francamente distinta porque determina que los asuntos electorales terminan en el TEPJF y que la Corte no puede revisar tales decisiones, sin embargo, la SCJN se ha declarado competente para conocer asuntos relativos a las elecciones.

#### **IV. Resumen de la sentencia SUP-JE-03/2022 del TEPJF**

El 21 de abril de 2021 la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) mediante el oficio INE/UTF/DRN/16000/2021, le solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) información y copia certificada de cuatro carpetas de investigación, por considerar dicha información necesaria para la sustanciación de un procedimiento administrativo sancionador en materia de fiscalización.

Primera respuesta negativa. El 22 de abril de 2021, el subprocurador especializado en investigación de delitos federales de la FGR, mediante el oficio FGR/SEIDF/0375/2020, negó la información y documentación requeridas por el INE. Argumentó el carácter reservado de las actuaciones de las carpetas de investigación, con fundamento el artículo 218<sup>1</sup>, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).

---

<sup>1</sup> Artículo 218. Reserva de los actos de investigación. Los registros de la investigación, así como todos los documentos, independientemente de su contenido o naturaleza, los objetos, los registros de voz e imágenes o cosas que le estén relacionados, son estrictamente reservados, por lo que únicamente las partes, podrán tener acceso a los mismos, con las limitaciones establecidas en este Código y demás disposiciones aplicables. La víctima u ofendido y su Asesor Jurídico podrán tener acceso a los registros de la investigación en cualquier momento. El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código. En ningún caso la reserva de los registros podrá hacerse valer en perjuicio del imputado y su Defensor, una vez dictado el auto de vinculación a proceso, salvo lo previsto en este Código o en las leyes especiales. Para efectos de acceso a la información pública gubernamental, el Ministerio Público únicamente deberá proporcionar una versión pública de las determinaciones de no ejercicio de la acción penal, archivo temporal o de aplicación de un criterio de oportunidad, siempre que haya transcurrido un plazo igual al de prescripción de los delitos de que se trate, de conformidad con lo dispuesto



Segunda Solicitud. El 21 de octubre de 2021, la UTF, mediante oficio INE/UTF/DRN/44417/2021, precisó a la FGR que el artículo 218 del CNPP no resulta aplicable, en virtud de que la información solicitada se encuentra relacionada directamente con el ejercicio de las facultades de fiscalización constitucionalmente otorgadas al INE.

Segunda negativa. El 23 de diciembre de 2021, la FGR, a través de la administradora ejecutiva adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Competencial, mediante el oficio FGR/FECOC/SP/4493/2021, le reiteró a la UTF la negativa a su petición, con fundamento en el artículo 218 del CNPP. Dicho oficio fue notificado al INE el 24 de diciembre del mismo año.

Juicio electoral. El 5 de enero de 2022, el INE, a través de su secretario ejecutivo, promovió el juicio electoral, a fin de impugnar el oficio señalado en el punto anterior. Recibidas las constancias respectivas en la Sala Superior del TEPJF, se integró el expediente SUP-JE-3/2022 y fue turnado a la ponencia del Magistrado Presidente del TEPJF, Reyes Rodríguez Mondragón.

De acuerdo con las competencias del TEPJF, la Sala Superior del tribunal es competente para conocer y resolver el juicio, ya que el INE contravirtió una determinación de una autoridad federal en materia de procuración de justicia que, desde la perspectiva del INE, obstaculiza el ejercicio de sus facultades. El acto impugnado se considera de tipo electoral, ya que incide en el funcionamiento y facultades del INE en materia de fiscalización.

Es decir, en este caso rivalizan la respuesta de la FGR, la cual se enmarca en su espectro de atribuciones, frente al ejercicio de facultades de una autoridad electoral, en este caso administrativa. Por lo tanto, el TEPJF tiene competencia para conocer los actos emitidos por autoridades cuando estos incidan en la función electoral, incluido el INE y su función fiscalizadora.

---

en el Código Penal Federal o estatal correspondiente, sin que pueda ser menor de tres años, ni mayor de doce años, contado a partir de que dicha determinación haya quedado firme.

Debe tomarse en cuenta que en la reforma de electoral de 2014 uno de los temas de mayor relevancia fue el régimen de fiscalización y su relación con el principio de máxima publicidad, como mecanismo optimizador del principio de autenticidad de elecciones, mediante una fiscalización entendida como el “ejercicio de todos aquellos medios de vigilancia y control electorales, por parte de las autoridades competentes, con el objeto de asegurar que los comicios conforme a la legislación electoral, se traduzcan la expresión libre, espontánea y auténtica de los ciudadanos”. (Iniciativa, 2013, art. 41, base V)

Con base en este razonamiento, la Sala Superior señaló que si bien la controversia INE-FGR no puede dirimirse a través de los medios de impugnación previstos, en ánimo de garantizar la tutela judicial frente a una posible afectación a las atribuciones de fiscalización de la autoridad electoral nacional, se determinó la atención del caso por la vía del juicio electoral. Consideraciones similares se siguieron en los expedientes SUP-JE-262/2021 y SUP-JE-263/2021.

De lo anterior, se señaló la improcedencia del argumento invocado por la FGR, ya que la cuestión que se impugna sí es materia electoral en tanto tiene incidencia en la materia y se deriva de un procedimiento de fiscalización del INE.

En el estudio de fondo, la Sala Superior puntualiza que la FGR negó la información y documentación invocando el secreto ministerial y que no se actualizaba ningún supuesto para superarlo. Sustentó su determinación en lo dispuesto en el artículo 218 del CNPP cual señala que los registros de las investigaciones ministeriales solo pueden darse a conocer a las partes, ya que la representación social se encuentra obligada a salvaguardar el sigilo de las investigaciones, así como los documentos independientemente de su contenido y naturaleza que sean estrictamente reservados. Agregó que dentro de las autoridades federales y locales que deben apoyar al INE no se menciona de manera expresa a la FGR; que la FGR no tiene facultades de fiscalización de finanzas a partidos y actores políticos, y que en los expedientes de investigación obran datos confidenciales que se deben proteger.

Al respecto el INE manifestó que la negativa del FGR para entregar la información transgrede las atribuciones del INE en materia de fiscalización, ya que de acuerdo

con el artículo 41 constitucional los secretos bancario, fiduciario y fiscal no resultarán oponibles a la facultad de revisión de la autoridad electoral nacional, y que se desconoce que el mismo orden constitucional establece que el desarrollo de dicha actividad contará con la colaboración de autoridades federales y locales. Así mismo, el INE señaló que al igual que los actos delictivos, la revisión de ingresos y egresos de los partidos políticos de interés público.

En su argumento el INE adiciona antecedentes en la materia, ya que la Sala Superior ya se ha pronunciado, al resolver los juicios electorales 262 y 263 de 2021, respecto de que la colisión de los derechos fundamentales de acceso a la información y el derecho al debido proceso y la presunción de inocencia, la cual no se tiene por actualizada cuando el solicitante de la información sea una autoridad del Estado mexicano que actúa en el ejercicio de sus propias atribuciones. Por lo que, conforme a dichos precedentes, el secreto ministerial no es oponible al INE, al considerar que dicha transferencia de información entre autoridades de ninguna manera implica que pierda su carácter de secreta, pues al contrario exhorta a las autoridades cedente y receptora a mantener altas medidas de protección y resguardo.

En resumen, el problema jurídico y político reside en determinar si en este caso el secreto ministerial debe de prevalecer por encima de la facultad investigadora de fiscalización del INE o si, por el contrario, dicho secreto no es oponible.

En la resolución se consideraron fundados los agravios por parte del INE, ya que es jurídicamente viable el traslado de información entre FGR e INE para el cumplimiento de sus funciones fiscalizadoras, sin que esto implique dejar de verificar el secreto ministerial.

Por otra parte, la Sala Superior del TEPJF problematiza los costos de mantener la oponibilidad del secreto ministerial a las facultades del INE en materia de fiscalización, ya que implicaría al INE tener que pelear en tribunales caso por caso, aún cuando la información requerida para cumplir con sus obligaciones en materia de fiscalización ya esté en manos de otra autoridad federal o local. Así, la Sala Superior del TEPJF mantuvo un criterio similar al establecido en el SUP-RAP-

18/2003. Interpretación coincidente con lo razonado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la resolución del Amparo 484/2018 en el que analizó la constitucionalidad del artículo 2018 del CNPP y concluyó que, a pesar de que dicho artículo establece una limitación válida al derecho a la información, el ministerio público debía tomar en consideración no solo el CNPP, sino también la Ley General de Acceso a la Información Pública de la que se advierte la inoponibilidad del secreto ministerial. Lo cual implica que el CNPP no puede interpretarse de manera aislada, sin que esto conduzca a negar toda solicitud de información solicitada a la FGR.

La conclusión de la Sala Superior fue “Por lo anterior, esta Sala Superior concluye que: Del artículo 4, párrafo 2, de la LEGIPE, 36 de la Ley de la Fiscalía General de la República y 74 del CNPP se implica el deber de prestar colaboración de las autoridades federales, incluida la FGR, a las autoridades electorales en este caso el INE, por lo que es fundada la solicitud del Instituto; el hecho de que la FGR otorgue información que tiene en su poder no implica que la misma deje de ser reservada o confidencial, pues el INE tiene el deber de mantenerla protegida y de utilizarla exclusivamente para los fines estrictamente necesarios”. La conclusión del Tribunal implicó la orden para que la FGR entregara la información requerida por el INE: “Por lo anterior, y al concluir que es fundada la pretensión del INE, se ordena a la FGR a que informe sobre el estado procesal y entregue las copias certificadas de las cuatro carpetas de investigación solicitadas por el Instituto”.

## **V. Análisis del expediente CC21/2022**

El 20 de abril del 2022 la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, detuvo la orden girada por el TEPJF a la FGR para que esta entregue al INE copias de la carpeta de investigación del caso.

“De darse la información -que ha solicitado en varias ocasiones el órgano electoral- se vulnerará el derecho humano de protección de los datos personales. De no concederse la medida cautelar en los términos y para los efectos precisados, se

causarían daños irreversibles, porque de otorgarse la documentación solicitada, sería imposible volver las cosas al estado en que se encontraban, permitiendo con ello que sus efectos se consumen irreparablemente; lo que resulta contrario la naturaleza jurídica de la medida precautoria de que se trata”<sup>2</sup>

En el razonamiento de la ministra, la suspensión prosperó con el ánimo de preservar la materia del juicio y salvaguardar el derecho humano a la protección de los datos personales. No obstante, el 2 de mayo de 2022, la SCJN admitió un recurso de reclamación que interpuso el INE en contra de la suspensión otorgada. El recurso no ha sido resuelto y la información no ha sido entregada.

Lo anterior, derivó en cuestionamientos sobre lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 99 en el que se versa sobre el carácter definitivo e inatacable de las decisiones del TEPJF, ya que de la intromisión de la Corte para conocer del caso pareciera que esta tiene competencias en la materia, convirtiéndola en una tercera instancia o una de mayor jerarquía. De este hecho se desprende la posible colisión entre cortes.

Algunos actores del Consejo General del INE expresaron su preocupación por la tendencia a la normalización de afectaciones al orden constitucional por las mismas autoridades del Estado Mexicano. Pues el artículo constitucional 105 es claro al señalar que la SCJN está facultada para conocer de las controversias constitucionales, con excepción de las propias de la materia electoral. Es pertinente mencionar que fue la misma Fiscalía General de la República quien interpuso la controversia constitucional, mientras que la SCJN se declaró competente.

En tanto, la suspensión para entregar la información requerida se mantendrá, hasta que el Pleno de la SCJN resuelva el litigio de fondo, es decir, la tensión entre el interés público para conocer el origen de los recursos en cuestión contra el secreto ministerial.

---

<sup>2</sup> “Ministra frena entrega al INE de carpetas sobre caso Pío López Obrador”, *Forbes*, 20 de abril de 2022. <https://www.forbes.com.mx/ministra-frena-entrega-al-ine-carpeta-sobre-el-caso-de-pio-lopez-obrador/>

## **VI. Conclusiones**

La ponencia tuvo como propósito explicar el conflicto entre Cortes, esto que tiene su origen en la colisión de los derechos fundamentales explica los problemas que se presentan cuando diversos órganos jurisdiccionales asumen que tienen competencia para conocer de un mismo asunto que es impugnado desde distintos ángulos y aquí es dónde se centra la problemática conceptual.

Los actores políticos demandan en diversas vías para ganar un asunto, esta es una estrategia general que no es novedosa. Ante esta situación es conveniente que la legislación determine, de antemano, cuáles competencias corresponden a cada órgano jurisdiccional para de esa forma obligar a que los actores políticos se dirijan a la instancia u órgano correspondiente. Hasta aquí esto parece no contradictorio, el problema surge cuando algún órgano que no es competente para una materia determina que sí está autorizado para conocer de una controversia porque debe tutelar un derecho diferente al que se está controvirtiendo de manera central y esa ha sido la fuente de conflicto entre Cortes de otros países.

Específicamente en los estados en los que se tiene una jurisdicción constitucional y una ordinaria son frecuentes los conflictos entre tribunales que se consideran competentes para conocer las diversas impugnaciones. En esos casos lo común ha sido que al final de cuentas, la jurisdicción constitucional termina superando las competencias de la jurisdicción ordinaria, ya sea por atracción de los asuntos o por la limitación de competencias mediante jurisprudencia.

Ahora bien, el estado mexicano desde la reforma electoral de 1996 estableció que habría dos jurisdicciones constitucionales, por una parte, la concerniente a la SCJN mediante las Acciones de Inconstitucionalidad y las Controversias Constitucionales, por otra parte, la correspondiente al TEPJF mediante el Juicio de los Derechos Político Electorales y el Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Este diseño fue ampliado con la reforma de 2014 al adscribirle la resolución de los Procedimientos Especiales Sancionadores a las salas del TEPJF.

En años recientes el problema ha sido que los actores políticos, especialmente los relacionados con el partido en el gobierno, han querido desconocer la distribución anterior acudiendo directamente a la SCJN por considerar que sus intereses no están bien protegidos en el TEPJF, ya que aquellos actores consideran que las magistraturas electorales son lejanas al gobierno y a su partido, aquí está fincado el problema político.

El gobierno y su partido consideran que los órganos jurisdiccionales deben considerar su pretendida posición especial de transformación de México, por lo que los razonamientos judiciales y sus consecuencias deben ser ratificados por los esfuerzos por cambiar las políticas que han regido en el país en los años del siglo XXI. Bajo esta argumentación consideran que todos los tribunales deben respaldarlos en sus obras y decisiones como ya lo han hecho en diversas expropiaciones para la infraestructura de sus obras emblemáticas que han sido detenidas por jueces de amparo. Situación similar consideran que está sucediendo en la jurisdicción electoral y por este motivo han acudido directamente a la SCJN.

Aquí el asunto es que tales actores políticos han generado una estrategia política involucrando a la cabeza del poder judicial, lo que ha generado diversas consecuencias políticas que todavía no terminan de asentarse y provocando un conflicto entre dos órganos jurisdiccionales, la SCJN y el TEPJF, que normalmente habían trabajado en conjunto sin tener mayores conflictos entre ellos.

Así, las implicaciones de la suspensión otorgada por la ministra Esquivel a la FGR para entregar la información solicitada se expresan en el contexto de opacidad y discrecionalidad que le brindan a la FGR para actuar sobre presuntos delitos electorales. Además de brindarle el poder de optar por cuáles diligencias atender, sin que otra institución pueda evaluar el apego al orden constitucional en su determinación. Finalmente, al 15 de agosto de 2022, el Pleno de la SCJN no ha resuelto el asunto de fondo.

## Referencias

Aarnio, A. (2000). *Reglas y principios en el razonamiento jurídico*. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, 539.

Atienza, M. & Ruiz, J. (1991). *Sobre principios y reglas*. Doxa, 101-107.

Dworkin, R. (1995). *Los derechos en serio*. Barcelona: Ariel. 75-78

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 41 Constitucional (2013). Diario de los debates de la Comisión Permanente del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos del 20 de agosto.

Kelsen, H. (1983). *Teoría general del derecho y del estado*. E. García Maynez (trad.). México: U.N.A.M. 71-72.

Ruíz, R. (2013), "La ponderación en la resolución de colisiones de derechos fundamentales. Especial referencia a la jurisprudencia constitucional española", *Derecho y realidad*. Núm 22. II semestre de 2013. P. 354.

Zagrebesky, G. (1995). *El Derecho dúctil. Ley, derechos, justicia*. M. Gascón (trad.) Madrid: Trotta. P.109.

## Sentencias

Controversia Constitucional 21/2022.

Juicio Electoral SUP-JE-3/2022